

**C.A. de Santiago.**

**Santiago, veinticinco de abril de dos mil veinticinco.**

**VISTOS:**

En estos autos Rol N° 314-2024 (Cont. Adm. - Reclamaciones) se ordenó traer los autos en relación para conocer, en vista conjunta y uno en pos de otro, los reclamos de ilegalidad de los ingresos Rol N° 441-2024 y Rol N° 470-2024.

**Y CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, en representación de la Sociedad Azul Azul S.A., comparece el Sr. Jorge Arredondo Pacheco quien interpone esta acción de reclamación de ilegalidad en contra de la I. Municipalidad de Ñuñoa, corporación autónoma de derecho público, representada legalmente por la Sra. Alcaldesa doña Emilia Ríos Saavedra, en razón de la omisión de pronunciamiento respecto del reclamo de ilegalidad planteado en sede administrativa que dedujo el 27 de marzo de 2024 y que interpuso por la dictación del Decreto N° 00385/2024, de 27 de febrero de 2024, en virtud del cual se aprobó una modificación a la Ordenanza N° 26 de Derechos por Servicios, Concesiones y Permisos (en adelante e indistintamente, el “Decreto”), acto administrativo en virtud del cual se incorporó un nuevo Título X, en que se establecen -a juicio de la reclamante, de manera ilegal y arbitraria- dos nuevos derechos municipales justificados en las externalidades negativas que producen grandes eventos desarrollados en las instalaciones del Estadio Nacional.

Sostiene la reclamante que, por la vía de la omisión de pronunciamiento que impugna, la Alcaldesa de Ñuñoa reitera y hace suyas todas las ilegalidades contenidas en la modificación al Decreto; y que, en su calidad de sociedad anónima de giro de esparcimiento deportivo y concesionaria de los derechos del Club Deportivo de Fútbol Universidad de Chile, organiza eventos deportivos masivos que se llevan a cabo justamente en el Estadio Nacional, lugar afectado por los dos nuevos derechos municipales creados por el Decreto, por lo que afirma hallarse directamente afectada por aquellos y que se imponen a quien decida emplear el Estadio Nacional.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FLSCXURXLEE

En relación con el nuevo derecho por recuperación de espacio público, el reclamante afirma que, en la práctica, la Municipalidad es incapaz de determinar realmente a qué servicios se destinan los fondos y el valor de ellos. Y, en relación con el segundo nuevo derecho para el resguardo del perímetro del Estadio Nacional, controvierte la determinación de su valor por comprometer recursos municipales vinculados a seguridad pública y costos de oportunidad para la mantención de vigilancia de todo el territorio comunal.

Añade que esos dos nuevos derechos municipales no sólo resultan desproporcionados en cuanto a su monto; sino también en su exigibilidad, pues estima una flagrante ilegalidad su imposición repentina y brusca.

El reclamo continúa señalando que, tanto en la justificación de su establecimiento, como en la determinación de su monto final, en la determinación de los distintos elementos que lo componen, en la del perímetro a cubrir y en la de las externalidades que pretende financiar y los mecanismos señalados al efecto, echa de menos una robusta fundamentación técnica, jurídica y económica, lo que -sostiene- afecta derechos fundamentales al gravar su actividad económica con un costo adicional.

El reclamo, en primer término, alega una falta de motivación transversal de la Ordenanza que estableció los nuevos derechos y que se manifestaría en tres aspectos: I. La falta de justificación técnica y económica del valor asociado a los derechos municipales o determinación del *quantum* de los mismos; II. La irracionalidad de la determinación del perímetro de resguardo del Estadio Nacional fijado por la Ordenanza; y III. Los daños cometidos. Sobre este primer capítulo de reclamación arguye que la Sesión Ordinaria N° 5, de 5 de febrero de 2024, del Concejo Municipal de Ñuñoa no sostuvo una discusión real que abordare los puntos señalados, ni se aprecia de las invocaciones normativas de la propia Ordenanza, por lo que -concluye- la falta de motivación transversal que denuncia contravendría los principios de imparcialidad, transparencia y publicidad y motivación de los actos administrativos que, no sólo merman el control judicial de los mismos; sino que, por contravenir el principio de razonabilidad, hacen a la Ordenanza devenir en ilegal.

El segundo capítulo de reclamación sostiene que los derechos municipales no existen para subsidiar los defectos de entidades estatales en



el ejercicio de sus potestades ni puede traspasarse la carga económica de tales deficiencias a los arrendatarios del Estadio Nacional para que éstos terminen pagando el costo de las disputas que el reclamante atribuye a la Municipalidad de Ñuñoa y al Instituto Nacional del Deporte en materia de seguridad. En apoyo de este argumento, la reclamante refiere que la Sesión Ordinaria N° 5, de 5 de febrero de 2024, del Concejo Municipal de Ñuñoa habría puesto en evidencia una desviación de fin al crear esto dos nuevos derechos, desviación que -a su juicio- vicia la Ordenanza por contravenir el principio de legalidad.

En tercer término, afirma el reclamante, el Decreto sería ilegal porque las supuestas externalidades negativas de un evento deportivo ya se encuentran previstas y cubiertas por la reclamante a propósito de los planes de seguridad aprobados por la Delegación Presidencial, las autorizaciones previas e informe de Carabineros y las condiciones de seguridad incorporadas a los contratos con los administradores de los recintos deportivos conforme al Reglamento de la Ley N° 19.327, más el pago del canon de arriendo del Estadio. Y, además, en algunos casos, cubiertos incluso por la propia Municipalidad al cobrar -por ejemplo- derechos por servicios de aseo y ornato. Así, concluye el reclamante, los nuevos derechos constituyen un “doble pago” por concepto de seguridad, en que el supuesto nuevo servicio a la “zona de afectación” que la Municipalidad cobra en realidad ya se encuentra cubierto por la reclamante.

El capítulo cuarto del reclamo sostiene que la imposición de los nuevos derechos resulta desproporcionada, pues se debió contemplar una entrada en vigencia gradual de los mismos que no afectase gravemente contratos de arriendo o concesión ya cerrados entre organizadores y el Instituto Nacional del Deporte, y que estima contrario al principio de proporcionalidad, máxima de razonabilidad o principio de prohibición de exceso.

El capítulo final de la reclamación afirma que la decisión de la Municipalidad de Ñuñoa vulnera el principio de igualdad de repartición de las cargas públicas ya que la creación de los derechos de marras se impone sólo respecto al uso del Estadio Nacional; mientras que el arriendo y uso de otros recintos deportivos -ya dentro o fuera de la comuna- no encuentra asociado este tipo de tributo, lo que vulnera directamente el principio consagrado en el artículo 19 N° 20 de la Constitución Política.



El reclamo finaliza pidiendo, en concreto, que se lo acoja y se declare que la decisión administrativa materializada en el Decreto impugnado adolece de cada uno de los vicios de ilegalidad denunciados, dejándolo sin efecto.

**SEGUNDO:** Que por la Sra. Alcaldesa y el H. Concejo Municipal de la I. Municipalidad de Ñuñoa se evacuó el informe de rigor que pide rechazar, en todas sus partes, el reclamo interpuesto, con expresa condena en costas, por los argumentos que plantea; siendo el primero de ellos que el Decreto Alcaldicio no es ilegal, toda vez que el reclamo no identifica las normas legales específicamente transgredidas como exige el artículo 151 letra d) de la Ley N° 19.880; y sólo referir principios sin indicar, tampoco, la forma en que estos habrían sido vulnerados.

Añade que el Decreto se halla también debidamente fundado al contener, además de la mención a sus antecedentes legales, los fundamentos, lógicos y razonables, por los cuales la Municipalidad, en uso de sus facultades, tomó la decisión de modificar la Ordenanza referida. Luego, refuta cada una de los capítulos de la reclamación.

Así, en primer término y en relación con la valoración técnico-económica de los nuevos derechos, señala que no procede del azar, sino que se sustenta tomando como referencia los precios de los distintos contratos vigentes en el Municipio, los costos de horas corrientes y horas por trabajos extraordinarios de la dotación municipal y el costo de oportunidad de la Municipalidad en concentrar recursos y horas de trabajo en un sector determinado en detrimento de otros sectores de la comuna. En específico, respecto del derecho por recuperación del espacio público lo justifica en las externalidades negativas relacionadas con el uso del espacio público, como acumulación de basura, vehículos mal estacionados, daños a la infraestructura (rotura de sistemas de riego, de soleras, de jardines y suelos, rayado de murallas y mobiliario urbano, entre otros), todo expresado a través de una fórmula que expresa costos variados por un factor aplicado a tramos de aforo. Mientras que, en el caso del derecho de resguardo del perímetro, su valor se relaciona con la mitigación de distintos trastornos que acarrea para los vecinos del perímetro la alteración de servicios (como el de transporte público, estacionamiento irregular, problemas de acceso, entre otros), lo que exige también el despliegue de recursos municipales vinculados a la Seguridad Pública y el costo de oportunidad que implica para la mantención



de la vigilancia de todo el territorio comunal, todo, también expresado a través de una fórmula representativa de costos variables representativos de distintos servicios en materia de seguridad y un múltiplo que corresponde al porcentaje que proporciona el gasto según aforo. En ambos casos, concluye, las fórmulas de cálculos para determinar el quantum de los derechos incorporados a la Ordenanza N° 26 responden a criterios objetivos, debidamente expuestos, tanto en la Sesión Ordinaria N°05, de 5 de febrero de 2024, del Concejo Municipal, donde se aprobó la modificación impugnada, como en el Decreto que así los dispuso.

En segundo término, sobre la determinación del perímetro de resguardo del Estadio nacional, se informa que el área afectada lo es a modo referencial, ya que, dependiendo del evento particular, pudieran verse afectadas otros lugares de la comuna que quedan fuera del perímetro, lo que -sostiene- resulta del todo lógico y razonable.

En tercer lugar, refuta la alegación de discrecionalidad o arbitrariedad formulada por el reclamo señalando que los fundamentos, fácticos y normativos que sustentan la creación de los dos nuevos derechos, abundan -tanto en el texto del Decreto impugnado como en la Sesión del Concejo Municipal referida- descartando toda arbitrariedad en la decisión del Municipio; más aún, si dicen relación con que los eventos masivos en el Estadio Nacional tienen costos de oportunidad, costos de logística, costos de recursos del despliegue de funcionarios, involucran externalidades en el espacio público, y requieren de un despliegue de seguridad pública adicional al que normalmente se debe realizar en el entorno del Estadio.

En cuarto lugar, niega que exista alguna problemática entre la Municipalidad y el Instituto Nacional del Deportes, como administrador del Estadio Nacional, y que se pretenda remediar la carga económica, producto de esta supuesta problemática, traspasando el costo a los arrendatarios del Estadio Nacional, lo que ejemplifica con un convenio de colaboración entre ambas entidades y que versa sobre el mantenimiento del orden, seguridad y limpieza de los bienes nacionales de uso público circundantes al Estadio Nacional, bajo el cual fue designado como coordinador el Director de Medio Ambiente de la Municipalidad; mientras que el Instituto Nacional del Deporte se comprometió a incluir una cláusula en todos sus contratos de arrendamientos, que tiene por finalidad exigir y acreditar el pago de los



derechos municipales que correspondieren por la mantención y recuperación del espacio público afectado conforme a la Ordenanza Municipal respecto de eventos masivos.

En quinto lugar, sobre la alegación de “doble pago” del reclamo, se informa que es el Reglamento de la Ley N° 19.327 el que regula la aprobación -por la Delegación presidencial- de los planes de seguridad para la autorización de los partidos de fútbol profesional y fija los derechos y deberes con ocasión de tales espectáculos, así como los procedimientos de autorización de los recintos y calendario de competencias y hechos conexos; aunque reconoce que los planes de seguridad que establece la Delegación Presidencial no son suficientes ni para el interior ni para el exterior del Estadio Nacional.

En sexto lugar, sobre el reproche de falta de proporcionalidad de la medida de introducir estos nuevos derechos municipales, la informante reitera que los valores fijados dicen relación con criterios objetivos, lo no debería afectar económicamente a los organizadores de eventos masivos pues, considerando el aforo, les resulta marginal en relación a las ganancias que perciben por conceptos de entradas. Y añade que tampoco existiría desproporcionalidad pues el mismo Decreto establece que el Alcalde, por decreto fundado y previo acuerdo del Concejo Municipal, podrá rebajar o eximir cualquiera de los derechos establecidos en la Ordenanza, siempre que la ley lo permita y se trate de obras y/o servicios de manifiesto beneficio comunitario, entre los que se incluye a los eventos deportivos.

Finalmente, en cuanto a la afirmación que la decisión de la Municipalidad vulneraría el principio de igualdad de repartición de las cargas públicas, la informante no vislumbra cómo ello puede suceder si la situación fáctica que justificó la creación de los nuevos derechos guarda relación con externalidades causadas por eventos masivos con aforo superior a 45.000 personas; lo que en Ñuñoa sólo involucra al Estadio Nacional, pues no existe en ella otro recinto que pueda albergar dicho aforo; y, además, porque los nuevos derechos se aplican a todas las personas, naturales o jurídicas, que organicen un evento de tales características, por lo que no se vulneraría el principio de igualdad antes las cargas públicas.

La Municipalidad informante concluye haciendo presente que la reclamante no cuestiona el procedimiento de modificación de la Ordenanza;



sin perjuicio de lo cual se extiende en explicar su regularidad ya que -a su juicio- ello demuestra que el acto administrativo recurrido es legal y ajustado al principio de juridicidad, al haber sido dictado dentro de la competencia atribuida a la Municipalidad, bajo un procedimiento previsto y reglado, y cuyo contenido material no contradice el ordenamiento jurídico vigente.

**TERCERO:** La vista fiscal, a su turno, fue del parecer de rechazar el reclamo formulado teniendo para ello presente, en lo medular, que el Decreto materia de reproche se encuentra debidamente fundado, por lo que la conculcación denunciada de las normas o principios contenidos en la Ley N° 18.880 no se da; que el obrar o procedimiento seguido por la Municipalidad de Ñuñoa para establecer los derechos se ajustó a las normas legales del caso como el artículo 12 de la Ley N° 18.695 y, en especial, al artículo 65 letras d) y l) del mismo cuerpo legal; marco normativo del cual infiere que al dictar el Decreto impugnado la Municipalidad de Ñuñoa actuó dentro de las facultades legales reconocidas al Alcalde con acuerdo del Concejo Municipal.

El Fiscal Sr. Daniel Calvo Flores se extiende en dos alegaciones particulares del reclamo. La primera, aquella relativa a que las supuestas externalidades negativas de un evento deportivo ya se encuentran previstas y cubiertas por el reclamante con ocasión de los planes de seguridad aprobados por la Delegación Presidencial y el pago del arriendo del coliseo deportivo, que el Sr. Fiscal desestima por no hallarse probada de forma alguna y porque arrendar tal recinto involucra el costo por su uso, mas no de los daños y perjuicios causados en sus inmediaciones, que es lo que se cobra por medio de la modificación a la Ordenanza en el Decreto Alcaldicio impugnado. Y la segunda: la alegación de vulnerar la igual repartición de las cargas públicas, que desestima considerando que el arancel dispuesto por la Municipalidad de Ñuñoa no es un tributo o impuesto; y, a mayor abundamiento, porque el artículo 24 de la Ordenanza N° 26, que establece el cobro "de Derechos por Servicios, Concesiones y Permisos", es para el uso de las instalaciones del Estadio Nacional, por grandes eventos con aforo superior a 10.000 asistentes, sin discriminar si es por razones deportivas o de otro tipo de actividad.

**CUARTO:** Que, la Sociedad Azul Azul S.A. interpone reclamo de ilegalidad en contra del Decreto Alcaldicio N° 00385/2024 de la I. Municipalidad de Ñuñoa que modifica la Ordenanza N° 26 sobre Derechos



Municipales, por estimar que adolecería de vicios de legalidad que afectan sus derechos, en específico, al contemplar dos nuevos derechos municipales aplicables a grandes eventos en el Estadio Nacional.

**QUINTO:** Que, mediante la modificación introducida por el Decreto se agregó un nuevo Título X a la Ordenanza N° 26, de Derechos por Servicios, Concesiones y Permisos de la I. Municipalidad de Ñuñoa, en que se establecen dos nuevos derechos municipales fundados en las externalidades causadas por grandes eventos desarrollados en las instalaciones del Estadio Nacional: (i) uno por concepto de recuperación del espacio público por externalidades negativas y (ii) un segundo derecho por resguardo del perímetro del Estadio Nacional.

En relación con el nuevo derecho por recuperación de espacio público por externalidades negativas, éste se traduce en una fórmula con componentes de costo variable y un múltiplo referido a dos de tres tramos de aforo. Mientras que, en relación con el nuevo derecho de resguardo del perímetro del Estadio Nacional, su fórmula también compuesta de costos variables y un múltiplo aplicable a dos de tres tramos aforo.

Según indica el Decreto, ambos derechos son aplicables para espectáculos artísticos, culturales y eventos deportivos cuya producción o realización dependa de organizaciones privadas con fines de lucro y cuyo aforo sea superior a 10.000 asistentes.

El pago de estos derechos corresponde por cada día del evento y deben ser pagados con anterioridad a la realización del mismo.

La modificación del Decreto identifica como foco principal y referencial un polígono de resguardo del Estadio Nacional determinado por el eje de las calles José Domingo Cañas, Av. José Pedro Alessandri, Grecia, Exequiel Fernández, Los Alerces, Plaza Zañartu, Marathon, Guillermo Mann, Francisco Meneses, Calle 10, Los Jazmines, Crescente Errázuriz, José Manuel Infante y José Domingo Cañas.

Finalmente, los nuevos derechos municipales introducidos por la modificación entraron en vigencia el 1° de marzo de 2024.

**SEXTO:** Que, para comenzar, esta Corte advierte que el escrito del reclamo de ilegalidad no cumple con lo dispuesto por el artículo 151, letra d) inciso 3° de la Ley N° 18.695, esto es, con la exigencia de señalar con precisión la o las normas legales que se suponen infringida y, por vía





consecuencial, tampoco la forma como se ha producido la infracción que denuncia; sino que sólo da por vulnerados principios como los de imparcialidad, proporcionalidad y legalidad contenidos en la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, pero ninguna norma específica y de carácter sustantivo.

**SÉPTIMO:** Que, enseguida, el Decreto que se reclama modifica una ordenanza municipal: la Ordenanza N° 26 de Derechos por Servicios, Concesiones y Permisos aprobada, a su vez, por el Decreto Alcaldicio N° 1.492, de 31 de octubre de 2023. Y la posibilidad de modificar tal normativa municipal está dentro de las facultades privativas de un Alcalde con el acuerdo del respectivo Concejo Municipal -como ocurrió en este caso- según prescribe, en especial, el artículo 65 de la Ley N° 18.695, que dispone: “El alcalde requerirá el acuerdo del concejo para: ...d) Establecer derechos por los servicios municipales y por los permisos y concesiones; l) Dictar ordenanzas municipales y el reglamento a que se refiere el artículo 31”. De lo cual se concluye que la Municipalidad de Ñuñoa, al dictar el Decreto de que se trata, actuó dentro de sus facultades legales.

**OCTAVO:** Que el primer capítulo del reclamo alega una supuesta falta de motivación transversal del acto administrativo que reclama, en tres aspectos: (i) carencia de justificación técnica y económica del quantum de los nuevos derechos; (ii) irracionalidad en la delimitación del perímetro de resguardo; y (iii) falta de justificación o análisis de los daños que se pretenden financiar.

No obstante, esta Corte constata que tanto la Ordenanza como los antecedentes de su tramitación -en especial la Sesión Ordinaria N° 5 de su Concejo Municipal de 5 de febrero de 2024- contienen datos suficientes que permiten tener por cumplida la exigencia de motivación administrativa. En efecto, consta en los antecedentes de la sesión aludida que se discutió la necesidad de establecer estos derechos con base en la afectación significativa del espacio público y la seguridad comunal provocada por eventos masivos. La falta de una justificación “más robusta” o detallada no invalida *per se* el acto, mientras se cumplan los estándares de racionalidad y vinculación con la finalidad del acto, lo que aquí ocurre.



En efecto, del examen del Decreto reclamado se advierte que su artículo 24 prescribe que: “(a)nte las externalidades negativas que generan los eventos masivos que se desarrollan en el Parque Estadio Nacional y la afectación que ellas producen, la producción responsable de eventos o espectáculos masivos que se realicen en las instalaciones del nuevo Parque Estadio Nacional, deberán pagar derechos municipales por conceptos de: a. Recuperación del espacio público por externalidades negativas. b. Derecho de resguardo del perímetro del Estadio Nacional”, lo que desmiente la afirmación de que los nuevos derechos no posean justificación o que ésta sea insuficiente, desde que una externalidad negativa es -en el contexto que interesa- un costo económico de la producción de eventos masivos pero que no soporta su productor, siendo la precisa finalidad de estos derechos internalizar dichos costos o, dicho de otro modo, atribuirlos a su productor.

Más aún, tampoco resulta efectivo el reproche relativo a que los nuevos derechos creados adolezcan de imposibilidad de cálculo o que su metodología no resulte justificada, racional o lógica. En efecto, el Decreto en cuestión proporciona fórmulas de cálculo para ambos derechos, esto es, del de recuperación del espacio público por externalidades negativas y del derecho de resguardo del perímetro del Estadio Nacional, en ambos casos, incorporando las variables de costos en que se incurre y que se han de sufragar indexados al aforo del evento de que se trate.

En cuanto a la justificación de la delimitación del perímetro de resguardo, los antecedentes examinados dan cuenta que el área afectada lo es a modo referencial, lo que aparece razonable y ajustado a las características particulares y dinámica real de los eventos que se realizan en el Estadio Nacional, no siendo posible descartar que otros lugares de la comuna, incluso fuera del perímetro, pudieran verse afectados. Lo anterior se refrenda con lo informado por la corporación reclamada, al referir que el Director de la Dirección de Medio Ambiente, en la sesión donde se aprobó la modificación de la ordenanza, indicó que el “área referencial de afectación se determinó, luego de realizar una investigación del comportamiento del público asistente, a eventos de alto quórum, que fueron realizados durante los años 2018 a 2023, donde se concluyó cual es el entorno mayoritariamente afectado, y cuáles son los barrios más perjudicados y cuál es el área referencial de afectación del Estadio Nacional”.



Por último, en relación con la justificación de los daños a financiar, el Decreto impugnado establece el valor de los derechos teniendo en vista los precios de distintos contratos vigentes en el municipio, costos de horas corrientes y por trabajos extraordinarios de la dotación municipal y el costo de oportunidad en que incurre la Municipalidad al tener que concentrar recursos y horas de trabajo en un sector determinado en detrimento de otros sectores de la comuna; así, por ejemplo, se contemplan gastos por arriendo de vehículos, gastos extra por combustible para tales vehículos, costo en horas de funcionarios y el arriendo de equipos de radio para coordinación de acciones, los que corresponden a los necesarios y usuales en el tipo de eventos de que se trata. Más aún, en relación con el derecho por recuperación del espacio público, el Decreto detalla que las externalidades negativas relacionadas con él son: acumulación de basura y desperdicios, vehículos mal estacionados, rotura de sistemas de riego, rotura de soleras y solerillas, destrucción de suelos vegetales con césped u otras plantas, erosión de suelos de maicillo o tierra, rayado de murallas y mobiliario urbano, rayado de señaléticas de tránsito y equipamiento de transporte público y erosión de pinturas de demarcación vial. Mientras que, de acuerdo con el Decreto impugnado, el derecho de resguardo del perímetro se relaciona con la mitigación de diversos trastornos o perjuicios vecinales como la alteración del transporte público, estacionamiento irregular de vehículos, y problemas de acceso a barrios, domicilios y servicios, entre otros, que también demandan despliegue de recursos municipales vinculados a la Seguridad Pública y el costo de oportunidad que implica para la mantención de la vigilancia de todo el territorio comunal.

De esta manera, el Decreto reprochado se encuentra -en verdad- debidamente fundado y no se advierte infracción a los principios de motivación del acto administrativo, legalidad y transparencia, máxime si el acto fue dictado dentro de la competencia legal de los órganos municipales concernidos.

**NOVENO:** Que, en cuanto al segundo capítulo del reclamo, referido a una supuesta desviación de fin, en el sentido de que los derechos creados tendrían por objeto suplir deficiencias de otras instituciones del Estado, cabe señalar que no se ha aportado prueba suficiente que permita concluir tal desviación. La competencia de las municipalidades para establecer derechos



municipales por servicios que impliquen el uso del espacio público y la protección del entorno se encuentra expresamente reconocida en la Ley N° 18.695 y en los artículos 8 y 15 del Decreto Ley N° 3.063 sobre Rentas Municipales. Asimismo, la jurisprudencia ha validado la posibilidad de que los municipios impongan derechos específicos cuando existe un uso intensivo o extraordinario del espacio público, lo cual ocurre en el caso de eventos masivos en el Estadio Nacional. La decisión municipal se inserta dentro del marco de sus competencias y fines legales, por lo que no se configura una desviación de poder.

Asimismo, esta Corte no comparte la aseveración de que los derechos en examen pretendan subsidiar deficiencias de organismos públicos responsables ni que, con ellos, se pretenda trasladar indebidamente la carga de su financiamiento, puesto que -como es de suyo a las externalidades- no puede sostenerse que internalizar su costo sea en verdad una imposición indebida para quien causa la externalidad porque, precisamente, se trata de un costo de la producción y, en el caso de autos, un costo de la producción de eventos masivos que, de no mediar los derechos correctivos de las externalidades negativas, su carga económica se radicaría -ahora sí, indebidamente- en quienes no sólo no la causan, sino que se ven obligados a sufrirla.

**DÉCIMO:** Que respecto del tercer capítulo de la reclamación, esto es, la alegación de un “doble cobro” por servicios ya cubiertos por otras instancias públicas o por la misma reclamante, este argumento tampoco puede prosperar. En efecto, en esta parte, esta Corte comparte el análisis del Sr. Fiscal Judicial; y, por otra, añade que la existencia de obligaciones previas, como planes de seguridad, autorizaciones de la Delegación Presidencial o contratos con el Instituto Nacional del Deporte, no excluye la facultad municipal para establecer derechos adicionales por impactos específicos que recaen sobre el espacio público y la comunidad local. La prestación municipal de servicios tales como limpieza, vigilancia del entorno y ordenamiento vial, tiene carácter autónomo y no se encuentra necesariamente subsumida en los convenios u obligaciones existentes entre la reclamante y otros órganos del Estado. Por ende, el cobro por tales servicios no configura una duplicidad ilícita, sino una manifestación del principio de quien causa un daño es obligado a repararlo.



**UNDECIMO:** Que, en lo que dice relación con la supuesta desproporcionalidad de los nuevos derechos por ausencia de un período de transición o entrada en vigencia escalonada, debe indicarse que la normativa municipal impugnada no establece una aplicación retroactiva ni vulnera derechos adquiridos. Los actos administrativos rigen *in actum* y sólo tienen efecto hacia el futuro, y la exigencia del pago de derechos por eventos realizados con posterioridad a la publicación de la Ordenanza cumple con ese principio. La sola circunstancia de que los organizadores de eventos hayan celebrado contratos previos al establecimiento de estos derechos no impide la aplicación de la normativa vigente al momento de realizar el evento. En consecuencia, no se advierte transgresión al principio de proporcionalidad ni a la prohibición de efecto retroactivo de actos de la administración.

En cuanto a la alegación de la reclamante que la vigencia del Decreto importaría una alteración intempestiva y brusca del *status quo*, irracional y que afectó de manera directa contratos en plena ejecución, por una parte, no existe constancia en estos antecedentes que lo último efectivamente sucediera, y, por otro lado, la circunstancia que los derechos de marras comenzaren a regir desde el 1º de marzo de 2024 no puede ser constitutivo de una ilegalidad, desde que el artículo 42 inciso 3º de la Ley de Rentas Municipales dispone expresamente que, cuando se trate de servicios nuevos (categoría a la que se adscriben los nuevos derechos), “las ordenanzas se publicarán en cualquier época, comenzando a regir el primer día del mes siguiente al de su publicación”, siendo éste precisamente el caso excepcional de autos; ni tampoco como una arbitrariedad o el paradigma de un tratamiento discriminatorio y lesivo para el reclamante, desde que la modificación de la Ordenanza se aplica de una manera general a todos quienes requieran el servicio al que se adscriben los nuevos cobros.

Finalmente, no es reprochable el que la publicación de la modificación que incorporó los nuevos derechos se haya efectuado el 28 de febrero de 2024; ni que -por una ágil gestión de la Municipalidad- dicha modificación entrara en vigencia el 1º de marzo de 2024, precisamente, por tratarse de un efecto previsto por la misma Ordenanza; y sin que la ocurrencia de tal efecto pueda vincularse de manera necesaria a la existencia de eventos masivos programados para días venideros, por lo demás, tampoco comprobada.



**DUODECIMO:** Que, el último capítulo del reclamo acusa infracción al principio de igualdad en la repartición de las cargas públicas consagrado en el artículo 19 N° 20 de la Constitución, pues -según la reclamante- los nuevos derechos se aplican exclusivamente al Estadio Nacional y no a otros recintos deportivos.

Tal argumento desconoce, sin embargo, que el principio de igualdad no implica identidad de trato, sino trato igual a situaciones equivalentes. El Estadio Nacional, por su magnitud, ubicación y capacidad y su entorno padecen externalidades significativamente distintas a las de otros recintos deportivos y sus entornos de afectación, tanto dentro como fuera de la comuna. En este contexto, el establecimiento de derechos específicos y diferenciados no resulta discriminatorio, sino una medida razonable y ajustada a derecho que se sustenta en las particularidades objetivas del caso, sin que esta Corte advierta, por tanto, infracción al principio de igualdad ante la ley ni una carga desproporcionada.

**DÉCIMO TERCERO:** Que, en consecuencia, desestimados todos los capítulos de la reclamación, esta Corte concluye que el Decreto Alcaldicio N° 00385/2024 no adolece de los vicios de ilegalidad denunciados, y que su dictación se encuentra amparada por las facultades legales de la autoridad municipal de Ñuñoa, habiéndose observado el procedimiento correspondiente y el respeto a los principios generales de la función y actos administrativos.

Por estas consideraciones y normas legales invocadas, además de lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y en el Título IV de la Ley N° 21.659, se decide que:

**Se rechaza, en todas sus partes,** el reclamo de ilegalidad deducido por la Sociedad Azul Azul S.A. en contra del Decreto Alcaldicio N° 00385/2024, de 27 de febrero de 2024, de la I. Municipalidad de Ñuñoa, en virtud del cual se aprobó la modificación a la Ordenanza N° 26 de Derechos por Servicios, Concesiones y Permisos; el que, en consecuencia, no adolece de ilegalidad.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Sr. Rafael M. Plaza Reveco.

**Contencioso Administrativo 314-2024.**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FLSCXURXLEE



**Juan Cristóbal Mera Muñoz**  
Ministro  
Corte de Apelaciones  
Veinticinco de abril de dos mil veinticinco  
13:42 UTC-4



**Luis Francisco Avilés Mellado**  
Ministro(S)  
Corte de Apelaciones  
Veinticinco de abril de dos mil veinticinco  
12:10 UTC-4



**Rafael Mauricio Plaza Reveco**  
Abogado  
Corte de Apelaciones  
Veinticinco de abril de dos mil veinticinco  
11:37 UTC-4



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FLSCXURXLEE

Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Juan Cristobal Mera M., Ministro Suplente Luis Avilés M. y Abogado Integrante Rafael Mauricio Plaza R. Santiago, veinticinco de abril de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veinticinco de abril de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FLSCXURXLEE



**C.A. de Santiago.**

**Santiago, veinticinco de abril de dos mil veinticinco.**

**VISTOS:**

En este ingreso Rol N° 441-2024 (Cont. Adm. - Reclamaciones) se ordenó traer los autos en relación, en vista conjunta a los ingresos Rol N° 314-2024 (Cont. Adm. -Reclamaciones) y Rol N° 470-2024 (Cont. Adm. – Reclamaciones), y en pos del primero.

**Y CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, en representación de la Sociedad Azul Azul S.A., comparece el Sr. Jorge Arredondo Pacheco quien interpone esta acción de reclamación de ilegalidad en contra de la I. Municipalidad de Ñuñoa, corporación autónoma de derecho público, representada legalmente por la Sra. Alcaldesa doña Emilia Ríos Saavedra, en razón de la omisión de pronunciamiento respecto del reclamo de ilegalidad que esa parte dedujo el 9 de mayo de 2024 contra el Decreto N° 00587/2024, de 25 de marzo de 2024, de la misma Municipalidad, en virtud del cual se ordenó el cobro de derechos municipales a su parte (en adelante, el Decreto 00587) por la suma de 159 Unidades Tributarias Mensuales.

Refiere el reclamante que, no obstante haber pagado los derechos municipales que cobra el acto impugnado (Decreto 00587), dicho acto adolece de ilegalidad pues descansa en el Decreto Alcaldicio N°385/2024, de 27 de febrero de 2024, que estableció tales derechos mediante una modificación a la Ordenanza Municipal N° 26 de Derechos por Servicios, Concesiones y Permisos. Refiere, además, que reclamó la ilegalidad del Decreto N° 385/2024 en la causa Rol N°314-2024 Cont-Adm. de esta Corte; y, en cuanto a su establecimiento, hace extensivas todas las falencias de aquel al acto administrativo que, ahora, cobra tales derechos para cada evento. Estima, entonces, que el cobro efectuado es ilegal porque se sustenta en derechos municipales ilegales, reiterando -por consistencia- los argumentos que levantó en contra de los derechos municipales por estimarlos aplicables al acto de su cobro que ahora impugna.

Pide, en definitiva, que el reclamo sea acogido, declarando que la decisión administrativa materializada en el Decreto N° 00587/2024, de fecha 25 de marzo de 2024, de la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa, en virtud del cual



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DSCXXUSXLEE

se cobró a Azul Azul S.A. el pago de derechos municipales por 159 UTM adolece de cada uno de los vicios de ilegalidad que denuncia, dejándolo sin efecto.

**SEGUNDO:** Evacuando el informe requerido, la I. Municipalidad de Ñuñoa solicita que el reclamo sea rechazado en todas sus partes, con expresa condena en costas, en virtud de similares argumentos que expuso al informar en causa Rol N° 314-2024 (Cont-Adm. – Reclamaciones) de esta Corte por los que refuta todas las supuestas ilegalidades denunciadas sosteniendo que el Decreto Alcaldicio N° 00385, de 27 de febrero de 2024, impugnado y la Ordenanza mediante la cual se originó, se encuentran debida y suficientemente motivados, y que contienen fundamentos lógicos y razonables por los cuales la Municipalidad, en uso de sus facultades, tomó la decisión de cobrar -mediante el Decreto N° 00587/2024- el monto correspondiente por la realización del evento deportivo, fundado en el nuevo derecho incorporado para hacer frente a las externalidades negativas de los eventos que se realizan en el Estadio Nacional.

**TERCERO:** La vista de la Sra. Fiscal Judicial, Sra. Ana María Hernández Medina, fue de opinión que el reclamo de ilegalidad sea desestimado, haciendo ver que todas las objeciones que se interponen en el presente reclamo en contra del Decreto N° 00587/2024 constituyen una reiteración de los argumentos que ya fueron planteados en el recurso de ilegalidad en contra del Decreto N° 00385/2024.

**CUARTO:** Que, es preciso tener presente que el cobro de este nuevo derecho municipal tiene como antecedente y como presupuesto el Decreto N°00385/2024, de 27 de febrero de 2024, que aprobó la modificación de la Ordenanza N° 26 de Derechos por Servicios, Concesiones y Permisos; y, asimismo, que la I. Municipalidad, al promulgar el Decreto mencionado se ajustó a las normas que rigen la materia, en especial los artículos 12 y 65 de la Ley N° 18.695.

De acuerdo con ello, el Decreto N° 00587/2024, objeto de reproche, se sustenta en el cobro de derechos municipales cuyo establecimiento esta Corte ya ha revisado en Rol N° 314-2024 Cont. Adm. y concluido exento de ilegalidad.

**QUINTO:** Que los derechos municipales cobrados por el Decreto 00587/2024 lo fueron con ocasión de un evento deportivo entre los clubes de



fútbol profesional Universidad de Chile y Cobresal, válido por la primera fecha del Campeonato Itaú 2024, partido que fue programado para el día lunes 25 de marzo de 2024, a las 19:00 horas, en el Estadio Nacional, en la comuna de Ñuñoa.

**SEXTO:** Que, desechadas en su momento las objeciones de legalidad al Decreto Alcaldicio N° 00385/2024 en el ingreso Rol N° 314-2024 (Cont. Adm. – Reclamaciones); y, no haberse desconocido el hecho que gatilla el cobro de los mismos referido en el considerando que precede, resulta inconcuso que el Decreto N° 00587/2024 se sustenta en un acto administrativo exento de reproches de ilegalidad, fue dictado por la autoridad competente dentro de la esfera de sus atribuciones y se halla debidamente fundado en un antecedente de hecho no controvertido, por lo que esta Corte concluye que el Decreto de autos tampoco adolece de los vicios denunciados.

Por estas consideraciones y normas legales invocadas, además de lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y en el Título IV de la Ley N° 21.659, se decide que:

**Se rechaza en todas sus partes**, el reclamo de ilegalidad deducido por la Sociedad Azul Azul S.A. en contra del Decreto N° 00587/2024, de fecha 25 de marzo de 2024, de la I. Municipalidad de Ñuñoa; el que, por tanto, no es ilegal.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Sr. Rafael M. Plaza Reveco.

**Contencioso Administrativo 441-2024.**

<div></div> <div><b>Juan Cristóbal Mera Muñoz</b> Ministro Corte de Apelaciones Veinticinco de abril de dos mil veinticinco 13:42 UTC-4</div> <div></div>	<div></div> <div><b>Luis Francisco Avilés Mellado</b> Ministro(S) Corte de Apelaciones Veinticinco de abril de dos mil veinticinco 12:10 UTC-4</div> <div></div>
<div></div> <div><b>Rafael Mauricio Plaza Reveco</b> Abogado Corte de Apelaciones Veinticinco de abril de dos mil veinticinco 11:37 UTC-4</div> <div></div>	

Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Juan Cristobal Mera M., Ministro Suplente Luis Avilés M. y Abogado Integrante Rafael Mauricio Plaza R. Santiago, veinticinco de abril de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veinticinco de abril de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: DSCXXUSXLEE

**C.A. de Santiago.**

**Santiago, veinticinco de abril de dos mil veinticinco.**

**VISTOS:**

En estos autos Rol N° 470-2024 (Cont. Adm. - Reclamaciones) se ordenó traer los autos en relación para conocerlo, en vista conjunta y en pos de los reclamos de ilegalidad ingresos Rol N° 314-2024 (Cont. Adm. - Reclamaciones) y Rol N° 441-2024 (Cont. Adm. - Reclamaciones).

**Y CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, en representación de la Sociedad Azul Azul S.A., comparece el Sr. Jorge Arredondo Pacheco quien interpone esta acción de reclamación de ilegalidad en contra de la I. Municipalidad de Ñuñoa, representada legalmente por la Sra. Alcaldesa doña Emilia Ríos Saavedra, en razón de la omisión de pronunciamiento respecto del reclamo de ilegalidad que esa parte dedujo el 20 de mayo de 2024 contra el Decreto N° 00688/2024, de 8 de abril de 2024, de la misma Municipalidad, en virtud del cual se ordenó el cobro de derechos municipales a su parte (en adelante, el Decreto 00688) por la suma de 159 Unidades Tributarias Mensuales.

No obstante haberlos pagado, refiere el reclamante que los derechos municipales que cobra el Decreto 00688 descansan en el Decreto Alcaldicio N° 385/2024, de 27 de febrero de 2024, que los estableció mediante una modificación a la tantas veces referida Ordenanza Municipal N° 26. Sostiene que, por sustentarse en derechos municipales ilegales, también es ilegal el Decreto 00688 que impone su cobro, reiterando a su respecto los argumentos de ilegalidad que opuso al Decreto Alcaldicio N° 385/2024.

Pide, en definitiva, que el reclamo sea acogido, declarando que la decisión administrativa materializada en el Decreto N° 00688/2024, de fecha 8 de abril de 2024, de la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa, en virtud del cual se cobró a Azul Azul S.A. el pago de los derechos municipales por 159 UTM adolece de cada uno de los vicios de ilegalidad que denuncia, dejándolo sin efecto.

**SEGUNDO:** Evacuando el informe requerido, la I. Municipalidad de Ñuñoa solicita que el reclamo sea rechazado en todas sus partes, con expresa condena en costas, en virtud de similares argumentos que expuso al informar en causa Rol N° 314-2024 (Cont. Adm. – Reclamaciones) de esta



Corte, por los que refuta todas las supuestas ilegalidades denunciadas, sosteniendo que el Decreto Alcaldicio N° 00385, de 27 de febrero de 2024, impugnado y la Ordenanza mediante la cual se originó, se encuentran debida y suficientemente motivados, y que contienen fundamentos lógicos y razonables por los cuales la Municipalidad, en uso de sus facultades, tomó la decisión de cobrar -mediante el Decreto N° 00688/2024- el monto correspondiente a la realización del evento deportivo, fundado en el nuevo derecho incorporado para hacer frente a las externalidades negativas de los eventos que se realizan en el Estadio Nacional.

**TERCERO:** La Fiscal Judicial Sra. Javiera González Sepúlveda informa el reclamo de ilegalidad en examen y es de opinión de rechazarlo por no haber incurrido el Decreto N° 00688/2024, de 8 de abril de 2024, en ninguna de las ilegalidades denunciadas por el reclamante.

**CUARTO:** Que, es preciso tener presente que el cobro de este nuevo derecho municipal tiene como antecedente y como presupuesto el referido Decreto N°00385/2024, que aprobó la modificación de la Ordenanza N° 26; y, asimismo, que la I. Municipalidad, al promulgar el Decreto mencionado se ajustó a las normas que rigen la materia, en especial los artículos 12 y 65 de la Ley N° 18.695.

De acuerdo con ello, el Decreto N° 00587/2024, objeto de reproche, se sustenta en el cobro de derechos municipales cuyo establecimiento esta Corte ya ha revisado en Rol N° 314-2024 Cont. Adm. y concluido exento de ilegalidad.

**QUINTO:** Que, el cobro de este nuevo derecho municipal tiene como antecedente de hecho la realización de un evento deportivo entre los clubes de fútbol profesional Universidad de Chile y Coquimbo Unido, por un partido válido por la primera fecha del Campeonato Itaú 2024, programado para el domingo 14 de abril de 2024, a las 12.30 horas, en el Estadio Nacional, en la comuna de Ñuñoa.

**SEXTO:** Que, por idénticas razones a las contenidas en el ingreso de esta Corte Rol N° 314-2024 (Cont. Adm. - Reclamaciones) ya referido, resulta igualmente inconcuso que el Decreto N° 00688/2024 se sustenta en un acto administrativo exento de reproches de ilegalidad, fue dictado por la autoridad competente dentro de la esfera de sus atribuciones y se halla debidamente fundado en el hecho no controvertido que reseña el considerando que



precede, por lo que esta Corte concluye que el Decreto aquí mencionado tampoco adolece de las ilegalidades denunciadas.

Por estas consideraciones y normas legales invocadas, además de lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y en el Título IV de la Ley N° 21.659, se decide que:

**Se rechaza en todas sus partes**, el reclamo de ilegalidad deducido por la Sociedad Azul Azul S.A. en contra del Decreto N° 00688/2024, de fecha 8 de abril de 2024, de la I. Municipalidad de Ñuñoa; el que, por ende, se aviene a la ley.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Sr. Rafael M. Plaza Reveco.

**Contencioso Administrativo 470-2024.**





**Juan Cristóbal Mera Muñoz**  
Ministro  
Corte de Apelaciones  
Veinticinco de abril de dos mil veinticinco  
13:42 UTC-4



**Luis Francisco Avilés Mellado**  
Ministro(S)  
Corte de Apelaciones  
Veinticinco de abril de dos mil veinticinco  
12:10 UTC-4



**Rafael Mauricio Plaza Reveco**  
Abogado  
Corte de Apelaciones  
Veinticinco de abril de dos mil veinticinco  
11:37 UTC-4





Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Juan Cristobal Mera M., Ministro Suplente Luis Avilés M. y Abogado Integrante Rafael Mauricio Plaza R. Santiago, veinticinco de abril de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veinticinco de abril de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: KSQUXUTXLEE